

Sentencia

Tribunal

Comité de Derechos Humanos

Número expediente

Comunicación N° 196/1985

Carátula

Ibrahima Gueye y otros
contra Francia

Fecha

3 de abril de 1989

Antecedentes fácticos	Ibrahima Gueye y otras 742 personas de nacionalidad senegalesa más sirvieron en el ejército francés con anterioridad a la independencia de Senegal en 1960. Habiéndose retirado, aludieron discriminación racial debido a que la pensión percibida por un senegalés es inferior a la percibida por un francés. Con anterioridad, la Ley N° 51/561 del 18 de mayo de 1951 y el Decreto N° 51-590 del 23 de mayo de 1951 establecían un trato igualitario, lo cual cambió con la Ley de Finanzas N° 74-1129.
Problema jurídico	Determinar si corresponde un trato diferenciado a los militares senegaleses retirados, al haber perdido su nacionalidad francesa tras la independencia de Senegal
Disposiciones legales/normativas citadas	Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Jurisprudencia citada	

Principales argumentos

“9.5 Al determinar si el trato de que han sido objeto los autores en relación con el Código de Pensiones Militares francés se basa en criterios razonables y objetivos, el Comité señala que no fue la cuestión de la nacionalidad la que determinó que se concedieran pensiones a los autores, sino los servicios que habían prestado en el pasado. Habían prestado servicios en las fuerzas armadas francesas en las mismas condiciones que los ciudadanos franceses; durante 14 años después de la independencia del Senegal, fueron tratados de la misma manera que sus colegas franceses para los fines de los derechos de pensión, aunque no eran de nacionalidad francesa sino senegalesa. No se puede considerar que un cambio posterior de nacionalidad justifique en sí una diferencia de trato, ya que la base para la concesión de la pensión fueron los mismos servicios que prestaron tanto ellos como los soldados que siguieron siendo franceses. Ni tampoco se pueden invocar como justificación legítima las diferentes condiciones económicas, financieras y sociales de Francia y del Senegal. Si se compara el caso de los soldados de nacionalidad senegalesa retirados residentes en el Senegal con la de los soldados de nacionalidad francesa retirados que viven en el Senegal, se verá que aquéllos parecen vivir en las mismas condiciones económicas y sociales. Y sin embargo, el trato que recibirían unos y otros a los efectos de los derechos de pensión sería diferente. Por último, el hecho de que el Estado Parte alegue que ya no le resulta posible comprobar identidades y situaciones familiares a fin de impedir abusos en la administración de los planes de pensión no puede justificar una diferencia de trato. En opinión del Comité, no cabe invocar una simple inconveniencia de tipo administrativo, ni la posibilidad de que se cometa algún abuso respecto de los derechos a las pensiones, para justificar un trato desigual. El Comité llega a la conclusión de que la diferencia en el trato de los autores no se basa en criterios razonables y objetivos y que constituye una discriminación prohibida por el Pacto”.

Decisión

“10. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estima que los hechos del presente caso, en la medida en que han surtido efectos después del 17 de mayo de 1984 (fecha en que el Protocolo Facultativo entró en vigor para Francia), constituye una violación del artículo 26 del Pacto.

11. Por consiguiente, el Comité considera que el Estado Parte tiene la obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Pacto, de adoptar medidas eficaces para reparar las violaciones de que hayan sido víctimas los interesados”.

Enlace

<http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/196-1985.html>